



PROGRAMA DE POBLACIÓN
DOCUMENTOS DE TRABAJO

**Políticas asociadas a la fecundidad:
revisión de la evidencia internacional para el
análisis del caso uruguayo**

Ignacio Pardo
Gabriela Pedetti
Mariana Fernández Soto

Documento N°12
Setiembre 2023
ISSN 2393-7459

Índice

1. Introducción.....	3
2. La evidencia acerca del efecto de las políticas asociadas a la fecundidad.....	6
2.1. Evidencia a partir de experiencias nacionales.....	7
Rusia	7
Japón	8
Hungría y Polonia.....	9
Suecia.....	11
Francia	12
2.2. Evidencia a partir de investigaciones multinacionales	13
2.3. Los efectos de cada tipo de medida	15
Licencias	16
Flexibilidad laboral.....	17
Transferencias monetarias	18
Servicios de cuidados infantiles.....	19
3. La discusión sobre políticas ante “la gran caída” de la fecundidad uruguaya	21
4. Consideraciones finales.....	25
Referencias	27

1. Introducción

A comienzos de la década de 2020 se registraron niveles de fecundidad bajo el umbral de reemplazo en 126 de los 266 países que reportan información a Naciones Unidas (Naciones Unidas 2022). Es decir que el 53% de los países contaba con una Tasa Global de Fecundidad (TGF) inferior a 2,1 hijos por mujer. En ese marco de difusión masiva de patrones bajos de fecundidad, que van convirtiéndose en la norma en todas partes salvo África, la variabilidad entre países se da en un margen acotado; entre niveles de TGF más cercanos a 2 y más cercanos a 1 hijo por mujer. Casi un 20% de ellos se encuentra por debajo de 1,5, con una “gran divergencia” (Billari, 2018), que permite distinguir a países con niveles “muy bajos” ($TGF < 1,5$) e incluso “ultrabajos” ($TGF < 1,3$).

La valoración de estas tendencias no es consensual, pero a menudo la fecundidad inferior al umbral de reemplazo es vista como un problema, sea por criterios de “sostenibilidad demográfica” (fin del crecimiento, acentuación del envejecimiento), o por la brecha entre intenciones de fecundidad y nacimientos efectivos, si se consideran los derechos reproductivos que incluyen poder lograr el tamaño deseado de la descendencia. En general, los gobiernos han centrado su preocupación en la sostenibilidad a largo plazo de las tendencias demográficas (incluidos los descensos reales o previstos de la población total) y el ritmo acelerado de envejecimiento de la población, que ejercerá una mayor presión sobre las finanzas públicas, los sistemas de jubilaciones y pensiones, la seguridad social y la prestación de cuidados a miembros dependientes de los hogares, entre otros factores. En la mayoría de los casos han tomado algún tipo de medida, que no siempre apunta directamente a elevar los niveles de fecundidad o ajustarlos a los deseos de las personas, sino que también puede relacionarse con objetivos de bienestar y desarrollo de niños y/o padres y madres.

A nivel macro, hay dos posibles énfasis: las políticas suelen ser de corte más pronatalista a través de incentivos, o las políticas suelen estar orientadas a distribuir la carga de la crianza, con medidas ligadas a la corresponsabilidad de los cuidados. De todos modos, en la práctica, estas tipologías no siempre se desarrollan de forma menos nítida y mutuamente excluyente. Luego, en un nivel más concreto, pueden identificarse diferentes tipos de medidas implementadas, a partir de la combinación de licencias, transferencias monetarias, flexibilidad laboral y servicios de cuidado.

Al considerar las medidas que se han implementado en el último lustro en los países de baja fecundidad, la más común es la licencia maternal (remunerada y no remunerada), que da seguridad a los puestos de trabajo, especialmente de las madres. No obstante, existe una gran variedad de otro tipo de medidas adoptadas. Los cuatro tipos principales encontrados en los estudios recopilatorios (Sobotka et al. 2019) son:

subsidio de servicios de cuidado, transferencias familiares o por niño, licencia parental -remunerada o no-, y licencia paterna que asegura el puesto de trabajo del padre. Además, muchos países proveen otros incentivos, como horarios flexibles o parciales para padres y madres, o préstamos asociados a presencia de niños. En América Latina y el Caribe, alrededor de la mitad de los países no cuentan con una política específica que busque influir en los niveles de fecundidad (Naciones Unidas 2022).

Influir en la fecundidad de las personas no es sencillo pues no siempre es claro qué aspectos son claves como parte de la decisión de tener hijos. Entre los determinantes de la fecundidad baja o muy baja, los factores se han agrupado en tres tipos: 1) aspectos de tipo económico, como la incertidumbre asociada a la estabilidad laboral o el costo directo de la crianza; 2) aspectos limitantes en cuanto a la capacidad de las mujeres para combinar trabajo remunerado y crianza (inequidad de género en las tareas domésticas no remuneradas, inflexibilidad de condiciones de trabajo, poca disponibilidad de servicios de cuidado); y 3) aspectos relacionados con el cambio ideacional en cuanto a valores relacionados con la maternidad/paternidad y la autorrealización individual, como los discutidos en torno a la idea de Segunda Transición Demográfica (Balbo et al. 2013; Wilkins 2019). Además, se suele mencionar la incertidumbre permanente de nuestras sociedades como un clima de época poco amigable para tener hijos (Vignoli et al 2020).

A pesar de todos estos factores, quienes viven en países de baja o muy baja fecundidad suelen reportar un tamaño ideal de la descendencia que aún ronda los dos hijos en promedio (Sobotka et al. 2019; Wilkins 2019; Sobotka & Beaujouan 2014). Así, podría estarse frente a una “ventana de oportunidad política” (Gauthier 2007) para pensar medidas que busquen remover obstáculos para la realización de deseos ya existentes. Es decir, para salvar la brecha entre fecundidad ideal y efectiva; un concepto que varía según se consideren los *ideales* o las *intenciones* reproductivas de corto plazo, y que no siempre merece una interpretación lineal, pero que aún reviste cierta utilidad (Pardo 2019, Philipov 2009).

Este contexto ha colocado en un lugar de relevancia a las políticas demográficas, que de hecho tienen una larga historia. Antes del *baby boom* que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial, la baja fecundidad ya había despertado alarmas, como las señaladas por Kingsley David en 1937, acerca de la “incongruencia” entre los patrones de reproducción humana existentes tras la popularización de la anticoncepción, y el resto de la organización social (Rindfuss et al. 2010), o el libro *Crisis in the Population Question* de Alva & Gunnar Myrdal, que en la década de 1930 se preocupaban por el descenso de la fecundidad sueca y proponían medidas vinculadas a la discusión de la época sobre un posible estado de bienestar.

Las preocupaciones tradicionales en torno a la caída de la fecundidad, previas a la Conferencia de El Cairo en 1994¹ fueron las pronatalistas vinculadas al nacionalismo y al eugenismo, como en los casos extremos mussoliniano o nazi (Rossy 2011), o Francia en el siglo XIX, cuando se propagó el temor a una menor escala que la alemana y se acuñó el término *dénatalité*, en un alarmismo motivado por la derrota bélica de 1870. Hasta los 1960, este tipo de políticas reforzaron la familia de proveedor único, y convivieron con el neomalthusianismo² desde el que se intentó controlar el crecimiento poblacional con medidas antipoblacionistas, en ocasiones coercitivas (Pardo & Varela 2013). Post Cairo, el enfoque legítimo viró desde la perspectiva de control poblacional a la de derechos reproductivos, enfatizando en la pertinencia de políticas mayoritariamente vinculadas a la idea de conciliación familiar – laboral y abriendo así un importante margen de debate en torno a los modelos familiares y de equidad de género subyacentes a las políticas, cuyos objetivos comenzaron a incluir la potencial desfamiliarización de los cuidados infantiles. Mucho más relevante aun ha sido la discusión en los últimos 25 años, donde se concentró la gran acumulación de literatura sobre políticas familiares (Frejka y Gietel-Basten 2016).

El objetivo de este documento es sistematizar las investigaciones sobre el efecto de este tipo de políticas, con atención a las experiencias de algunos países de baja o muy baja fecundidad, así como describir el panorama para Uruguay, incluyendo el análisis de las medidas que se han propuesto más recientemente.

¹ La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizada en 1994 en el Cairo se considera un hito en materias de políticas de población debido a su enfoque de derechos humanos. Se abordaron temas sustanciales de población y desarrollo desde la perspectiva de los derechos reproductivos, la igualdad de género y la salud materna y reproductiva.

² El neomalthusianismo es una corriente de pensamiento sociodemográfico que vincula la eventual sobrepoblación y el rápido crecimiento demográfico con la escasez de recursos y los riesgos ambientales.

2. La evidencia acerca del efecto de las políticas asociadas a la fecundidad

La investigación acerca de qué tipo de políticas han influido en la fecundidad de las poblaciones ha debido superar el escollo de que se trata de intervenciones especialmente difíciles de evaluar, por variedad de motivos. Son típicamente universales, lo que dificulta la creación de grupos de control o comparación; tienen lugar al mismo tiempo que otros determinantes de la fecundidad, que son difíciles de aislar para ver el efecto neto de las políticas; operan en horizontes temporales diversos; no siempre se asocian a un modelo causal interpretable; pueden tener efecto diferencial según atributos individuales de los beneficiarios; y tienen efectos inesperados.

Por otra parte, pueden afectar distintas variables de resultado: una modificación en la fecundidad de período, medida con la TGF de cada año calendario, podría estar reflejando cambios en el momento en que se tienen los hijos más que cambios en la cantidad que se tienen una vez culminada la vida reproductiva de las cohortes. Por eso hay quienes sostienen que las políticas pueden juzgarse recién luego de 10-15 años (Frejka & Zakharov 2013). Asimismo, el tiempo que transcurre entre la iniciación y la adopción efectiva de una política, puede introducir ruidos adicionales. Del mismo modo, existe cierto riesgo adicional de una posible endogeneidad de las políticas, que quieren generar cambios en la fecundidad, pero se producen justamente porque hay cambios en la fecundidad, por lo que operan en un contexto especialmente móvil, complicando la medición de los efectos en la comparación internacional (Mills et al. 2011)³. Por otra parte, los propios mecanismos que vinculan políticas y fecundidad son complejos, en la medida que involucran información imperfecta por parte de los actores e indicadores de dichos mecanismos que no siempre están asociados a datos disponibles (Gauthier 2007).

Además, podría haber efectos no lineales (que no suelen investigarse) o interacciones no previstas en los modelos habituales. Por ejemplo, personas en distintos lugares de la distribución del ingreso que reaccionan distinto a la obtención de una transferencia, o licencias que se toman más frecuentemente en los dos extremos de la estratificación. Asimismo, no siempre es sencillo escoger modelos teóricos de comportamiento frente a incentivos, porque no hay consenso en cuál sería la racionalidad que se supone como base para la acción (Pardo 2019; de Bruijn 1999). Finalmente, es difícil metodológicamente establecer qué impacto tuvo en la fecundidad

³ Los diseños experimentales aún no son demasiado usados para atender todas estas dificultades de evaluación, aunque existen experimentos naturales que en algún caso han auxiliado las metodologías habituales (Mills et al., 2011).

cada política individual, dado que la coherencia y efecto de largo plazo son centrales (Frejka et al. 2008; Thévenon & Gauthier 2011).

Un ejemplo reciente de la complejidad existente a la hora de evaluar el impacto de estas políticas es el del programa Capital Maternal de Rusia: sus efectos varían en relación con las decisiones metodológicas que se tomen para su evaluación, como se verá más adelante (Frejka & Zakharov 2013; Miljkovic & Glazyrina 2015). De todos modos, que la evaluación de estas políticas sea difícil y en ocasiones controvertida no quiere decir que no puedan conocerse sus efectos sobre la fecundidad. De hecho, hay evidencia creciente al respecto, dada la profusión de políticas y de investigaciones que han buscado evaluarlas. Puede agruparse en dos: los estudios que se concentran en casos nacionales y los que utilizan datos de varios países a la vez, en busca de conclusiones más robustas. En lo que queda de esta sección, se presentarán algunos ejemplos de ambos tipos de investigaciones, basados en textos recopilatorios (fundamentalmente los más recientes, como Sobotka et al 2019) y en resultados específicos de investigación.

2.1. Evidencia a partir de experiencias nacionales

Rusia

El caso de Rusia es emblemático, entre varios motivos, por su larga tradición al respecto. Se han establecido políticas que afectan la fecundidad desde la década de 1930, pero especialmente las ha habido desde enero de 2007, cuando, con el objetivo de llegar a una TGF de 1,75 en una década, las políticas familiares recibieron más financiación duplicando su presupuesto hasta alcanzar casi un 1% de su PBI (Frejka & Zakharov 2013). Las medidas que se implementaron supusieron el aumento de transferencias por embarazo, nacimiento y primera infancia, el establecimiento de licencias generosamente remuneradas (que empezaban dos meses antes del parto) y la instalación del buque insignia de esta política, el Capital Maternal.

El Capital Maternal surgió en 2007 como una medida temporal hasta 2016, y luego decidió prolongarse. Se trata de un beneficio para madres de hijos de orden 2 o más, sin contraprestación, utilizable para renovar o comprar vivienda (o pagar la hipoteca), para la educación de los hijos, o como contribución a la jubilación de la madre. Ha sido usado extensamente por la población rusa, y cuenta con variabilidad regional, al complementarse con algunas políticas subnacionales. ¿Qué resultados se obtuvieron? A corto plazo, aumentaron los nacimientos de orden 2 o más. Sin embargo, investigaciones más recientes muestran que en pocos años el efecto fue disminuyendo, con un aumento en 2010-2011 de solamente 0,02 de la TGF, cuando había sido de 0,11 nacimientos por mujer en 2007-2008.

Si bien el discurso oficial sostiene que las políticas de 2007 fueron un éxito, buena parte de la evidencia no acompaña esa visión y sostiene que la política fracasó, porque el aumento de la TGF (a 1,6 en 2011) estaría asociada a un adelantamiento de nacimientos y a menores intervalos intergenésicos pero no a cambios significativos en la fecundidad de cohorte⁴ (Frejka & Zakharov 2013; Sobotka et al. 2019). También consideran que fue un fracaso quienes sostienen que el efecto no es tan grande para una política tan intensa en inversión (y calculan que solo se le puede atribuir a la política el aumento del 0,04 en la TGF), especulando con que políticas de empleo y de retención de personas migrantes en edad reproductiva generarían un mayor impacto (Miljkovic & Glazyrina 2015).

Por último, gran parte del debate refiere a la estratificación de los efectos, sea porque se celebre el aumento de los nacimientos de segundos y terceros hijos de las mujeres de más de 30 años (Elizarov & Levin 2015) o porque se señale que el impacto de la política no pudo llegar de forma significativa a otra población que no fuese la de los estratos bajos (Biryukova et al. 2016). Por todo esto, el caso de Rusia es ilustrativo de las ambivalencias que trae consigo la pregunta acerca de si una política funcionó o no, cuando parte de la respuesta depende de las perspectivas, indicadores y métodos escogidos.

Japón

El caso de Japón es asimismo emblemático, en su caso porque se trata de uno de los primeros países en llegar a niveles de fecundidad por debajo del reemplazo, hace casi medio siglo, para continuar luego hacia niveles muy bajos. Por ese motivo, sumado a la histórica aversión japonesa a promover la inmigración, las medidas destinadas a favorecer niveles más altos de fecundidad se asocian al combate al declive poblacional y el envejecimiento demográfico; se han venido acumulando en los últimos treinta años, dentro de un sistema de bienestar limitado en sus políticas familiares. El gobierno japonés ha establecido una meta demográfica explícita: considera que hay una “fecundidad deseable” de 1,8 hijos por mujer, aunque no se ha planteado un plazo para alcanzarla.

Las políticas implementadas hasta el momento incluyen beneficios monetarios, exenciones fiscales, y mejora de las licencias para madres y padres. Según detalle de la Oficina de Gabinete del gobierno japonés (2018), el plan apunta a limitar las jornadas de trabajo excesivamente largas, promover los casamientos y buscar una mejor

⁴ La fecundidad completa de cohorte es el número promedio de hijos que tiene una generación de mujeres cuando culmina la edad reproductiva.

corresponsabilidad en la crianza, con cuidados infantiles gratuitos y otras medidas para crear un ambiente amigable con la crianza.

Específicamente, las medidas implementadas en los cuidados de primera infancia se han ido ampliando y complejizando en sus prestaciones pero aún no logra gran matriculación en niños de 0 a 2 años. Con las licencias parentales sucede algo similar: si bien se han ampliado a 14 meses si ambos padres se acogen a ella, solo un 3,1% de los varones lo han hecho, y no funciona plenamente para empleos temporales o parciales, ni hay sanciones contra las empresas que la incumplan. La acumulación de tres décadas de medidas se vio reflejada en una inversión en políticas familiares que pasó del 0,36% del PIB en 1990-91 al 1,31% en 2015 (OECD 2019).

Tras estos esfuerzos, la fecundidad de período sigue siendo muy baja (1,36 hijos por mujer en 2022) y la nuliparidez definitiva alcanza a un 28% de las mujeres (la más alta a nivel mundial después de Hong Kong), pero la fecundidad de cohorte ha dejado de caer. Si bien la fecundidad en Japón es apenas superior a los niveles ultrabajos de algunos de sus vecinos asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea), aún no resulta claro en qué medida se deba el conjunto de medidas implementadas. Cuando se estudia el caso japonés, suele concluirse que “la baja fecundidad es resistente a las políticas” y que el impacto de las políticas es tan pequeño que “no hay final a la vista” para este escenario (Tsuya 2017; Matsukura et al. 2007). De todos modos, hay que considerar que las medidas más recientes tienen un efecto aún desconocido.

Una de las enseñanzas más notorias de este caso es que cuando se estiman efectos de políticas, es importante observar la interacción de los incentivos de política con las orientaciones culturales prevalentes. En Japón, la división tradicional del trabajo, la intensa competitividad a la que se somete a los niños y adolescentes, el rol del matrimonio en las decisiones reproductivas, por citar las más determinantes.

Hungría y Polonia

Diferentes son los motivos por los que interesa el conjunto de políticas implementadas en los países de Europa Oriental. Se trata principalmente de Estados que han adoptado objetivos pronatalistas relativamente explícitos, tras haberse constituido en una de las regiones de menor fecundidad a partir de la década del 90. Uno de los casos más ilustrativos de lo anterior es Hungría, con una TGF en el entorno de 1,58 (Naciones Unidas 2022), y un gobierno que ha declarado el objetivo de lograr una TGF de 2,1 en 2030, invirtiendo un 4% de su PBI en políticas familiares.

Las medidas que se han implementado son variadas y amplias. Para empezar, hay beneficios monetarios y exenciones tributarias que dependen del número de hijos de cada familia (algunas son por hijo, y otras se aplican solo si hay tres hijos o más, hasta

que el de menor edad cumpla 8 años; en el caso de los impuestos crece la deducción luego del tercero) así como la licencia maternal de 24 semanas y parental de otras 136 semanas, de cobertura universal. Además, se les ofrece a las parejas préstamos libres de intereses por unos 25 mil dólares, con un porcentaje de deuda que se cancela si se tienen tres hijos. Otras medidas incluyen licencia remunerada para abuelos y guarderías hasta los 3 años del niño (aunque solo cubren el 10% de la población), y hasta subsidios para que las familias grandes compren vehículos de siete asientos (Frejka & Gietel-Basten 2016). El Estado húngaro ha mantenido una alta inversión en este tipo de medidas, aunque fue cambiando las condiciones y el énfasis, lo que agrega una cuota de imprevisibilidad a los incentivos explícitamente pronatalistas que ha intentado instalar, en un contexto de particular incertidumbre dada la reinstauración del capitalismo en la década de 1990 y los cambios institucionales de los primeros 2000 (Spéder 2016; Spéder & Kamarás 2008).

En cuanto a la evaluación de estas medidas se destacó la licencia universal y bien remunerada de Hungría como un probable mecanismo de incentivo a la progresión al segundo hijo (Matysiak & Szalma 2014), aunque posiblemente también de demora en el regreso de las mujeres al mercado laboral. Quienes analizaron más globalmente las medidas, concluyen que hay efectos moderados del conjunto de medidas, si se los considera en relación a la magnitud del gasto (Gábos et al. 2009). Así, por ejemplo, pasar de 1,35 a 1,6 hijos por mujer necesitaría de un aumento del 93% en estos beneficios.

La evaluación del caso húngaro está desafiada por el registro de un aumento a niveles de 1,5 (en 2011 la TGF era de 1,24), similar al de poblaciones que no tuvieron políticas, lo que obliga a mayores esfuerzos si se quiere detectar un efecto causal entre medidas de política y nacimientos (Kapitany & Spéder 2018). No obstante, sí se pueden detectar algunos efectos específicos, como cierto aumento de los terceros hijos entre los estratos más bajos, a partir de apoyos estatales a la crianza, y entre los más altos, por exenciones tributarias (Spéder et al. 2020).

Al igual que Hungría, Polonia es un país con una historia de descenso pronunciado de la fecundidad y énfasis político en la consecución de objetivos pronatalistas, con fuertes mensajes públicos en ese sentido. De forma similar a otros países de su región, más que un énfasis en servicios de cuidados u otras políticas similares, sus medidas se orientan a privilegiar apoyos monetarios. El programa estrella es Familia500+, instalado en 2016. Se trata de un programa actualmente universal para personas con dos o más hijos. Sus beneficios refieren a un pago mensual para cada niño menor a 18 años y llega a ser de un tercio del salario mínimo.

Quienes estudian el caso polaco tienden a pensar que el programa Familia500+ tiene las ventajas y los problemas, destacan que la reducción de la pobreza no fue del

todo eficiente dado el costo del programa y que era necesario volcarse a políticas que atiendan la desigual carga de trabajo entre varones y mujeres y la generación de herramientas que fueran más allá de los incentivos económicos (CEA 2019). Este último punto es de relevancia si se considera que en los primeros años del programa casi un 3% de las mujeres salió del mercado laboral al recibir este apoyo, lo cual resulta preocupante si se miran otras dimensiones más allá de la natalidad (Magda et al. 2020), un abordaje siempre necesario en cualquier evaluación razonablemente abarcativa.

Suecia

En otras regiones de Europa pueden rastrearse modelos de política diferentes. Por lo pronto, los países nórdicos, cuya fecundidad comenzó a caer a niveles bajos muy tempranamente, tienen una estructura histórica de protección social asociada a una línea de feminismo de Estado, que los hace muy reconocibles como modelos basados en los cuidados infantiles y la equidad de género. Además del entramado institucional que busca la distribución equitativa de las cargas de cuidado, la sociedad civil tiene un rol activo. La sumatoria de esas condicionantes hace que los objetivos de política familiar tengan una seña de identidad especialmente relevante: suelen expresarse en términos de bienestar de adultos y niños y de equidad y no expresamente en términos de metas demográficas de natalidad (Pardo & Varela 2013).

En ese contexto, se destaca el caso sueco, con una política familiar activa y una cultura política amigable con las mujeres, lo que se expresa en el ámbito laboral y el doméstico y en la concreción de las obligaciones legales asociadas al vínculo entre ambas. A modo de ejemplo, desde la década de 1950 está prohibido despedir a una mujer por tener un hijo y Suecia fue el primer país del mundo en introducir un esquema de licencias neutral por género y en considerar a los padres a la par de las madres en el cuidado de los niños (Duvander et al. 2010). Las medidas y políticas suecas están centradas en los servicios de cuidado, pero el modelo contempla una combinación de licencias, estabilidad laboral y cuidados, con un conjunto amplio de otras medidas, como las de flexibilidad horaria en el trabajo. Cada progenitor tiene 240 días de licencia parental, con bloques que pueden incluir tiempo completo o jornadas parciales, hasta los 12 años del niño (Duvander & Haas 2018; Blum et al. 2018 en Sobotka et al. 2019). Además, los progenitores tienen el derecho de acortar su jornada laboral hasta el 75% de lo normal hasta que su hijo tenga ocho años (Kaufman & Bernhardt 2012). A su vez, la política de “speed premium” que funciona desde la década de los 1980 y busca promover la reducción del intervalo intergenésico, ha dado lugar a un cambio de calendario con intervalos más cortos en todos los estratos (Andersson et al. 2006).

Mantenida en niveles relativamente altos para su contexto (salvo por el descenso de los últimos años, que aún está siendo estudiado), la fecundidad sueca tiende a fluctuar, quizá porque las licencias remuneradas en relación con el salario ganado previamente podrían acelerar la fecundidad en épocas más prósperas pero posponerla en los tiempos de recesión (Sobotka et al. 2019). De todos modos, el uso de licencia de los padres se asocia positivamente con la continuidad de la fecundidad, en parejas con uno y dos hijos (Duvander et al. 2010).

Es significativo, en cualquier caso, que los objetivos de las políticas suecas no están atados a los niveles de fecundidad, aunque sus niveles relativamente altos hasta hace poco han sido atribuidos en buena medida a las políticas implementadas (Hoem 2005) y a los ideales de género presentes en los países de la región (Bernhardt et al. 2008).

Francia

Finalmente, las políticas llevadas adelante en Francia tienen otras particularidades, asociadas a su larga cultura pronatalista, su más reciente énfasis en objetivos de equidad y bienestar familiar e infantil y la centralidad de sus políticas de cuidado infantil. Cabe señalar que la tradición institucional de la política familiar francesa es tan larga que contempla el diálogo con asociaciones y movimientos sociales familiares desde una ley de 1901 y le dedica el 3,6% del PBI (Toulemon et al. 2008). Así, existen medidas de salud sexual y reproductiva más antiguas que en otras partes, como la reglamentación del aborto en 1975 y medidas de conciliación de distintos tipos, al punto que el sistema de protección social de 1945 introdujo asignaciones familiares universales de motivación pronatalista, dirigidas especialmente a las familias de 3 o más hijos (Thévenon 2016; Toulemon et al. 2008).

Hoy, las licencias varían en su duración según orden de nacimiento (para las maternales, en el tercer hijo aumentan de 16 a 26 semanas, con un 84% de sustitución del salario de la madre). En cuanto a los beneficios familiares, si bien son universales, sólo existen a partir del segundo hijo y son progresivos. A su vez, existen varios subsidios sometidos a evaluación de capacidad de pago para las familias con al menos un hijo menor de tres años. Uno de ellos es una asignación básica que incluye un pago en el 7° mes de embarazo y un subsidio mensual desde el nacimiento hasta el tercer cumpleaños, de los que solamente un 10% de las familias quedan excluidas. También existe un complemento para familias de tres hijos y más, cuando el menor llega a la edad de tres años.

Las medidas estrella de la política familiar francesa son los centros de cuidado: las cunas (*crèches*) y las escuelas maternales (*écoles maternelles*). Estas últimas implican la elección de guarderías colectivas (las hay públicas y privadas y están gestionadas por los

gobiernos locales) o una cuidadora certificada a domicilio; cumplen un rol importante, en niños de hasta 11 años, a contra horario de la escuela, que es en sí misma extensa en horario: de 8.30 a 16.30 horas (Toulemon et al. 2008). Las *crèches* están disponibles desde el fin de la licencia maternal, para bebés de 2 o 3 meses, y funcionan con horarios que abarcan desde la primera hora de la mañana al fin de la tarde, y desde los primeros meses de vida del bebé.

Medir el efecto de cada una de las políticas familiares francesas por separado, considerando todas las que entran en juego, es un esfuerzo complejísimo; el efecto global no equivale a la suma de todas las medidas, sino al contexto que implica a todas a la vez (Thévenon 2009; Pardo et al. 2011). Sin embargo, puede decirse que en las últimas cinco décadas la TGF ha mantenido una oscilación en niveles de entre 1,8 y 1,9 (Naciones Unidas 2022), sin descender por debajo de ese umbral, y con una fecundidad de cohorte cercana a los dos hijos. Las mujeres sin hijos son menos frecuentes en Francia que en otros países de su región, y también lo son las familias con tres o más hijos, lo que ha llevado a los autores que tratan estos temas a pensar que hay cierto efecto de largo plazo de las políticas, aunque aún haya cierta brecha entre hijos tenidos y deseados (Thévenon 2006; Toulemon et al. 2008).

2.2. Evidencia a partir de investigaciones multinacionales

Como se dijo, otra forma de evaluar efectos de políticas consiste en sistematizar lo sucedido en varios países. Es una estrategia no exenta de debilidades, ya que unifica contextos distintos, con la pérdida de detalle que esto puede traer consigo, pero tiene la fortaleza de acercarse a una posible comprobación más robusta del funcionamiento de incentivos y estructuras.

En uno de estos primeros trabajos de sistematización, se utilizaron datos de 20 países, sin hallar un efecto significativo de las transferencias económicas en la fecundidad, pero sí de un índice compuesto de políticas de conciliación familiar-laboral (Castles 2003). Más adelante, se resumieron los estudios de la década de 1990 y el comienzo del siglo XXI para países europeos (Neyer & Andersson 2008) para concluir que existe un conjunto que muestra resultados no concluyentes (Gauthier & Hatzius 1997; Sleebos 2003; Gauthier 2007; Hoem 2008) o acaso marginales (Caldwell & Schindlmayr 2003; Demeny 2003), mientras que otro conjunto de estudios de nivel micro muestran algo de impacto (Andersson 2004; Aassve et al. 2006; Rindfuss et al. 2007)

En una posterior revisión de variedad de estudios, que también arrojó hallazgos mixtos y poco concluyentes, se pudo avanzar hacia dos conclusiones de interés (Gauthier

2007). En primer lugar, la reiterada sospecha de que el impacto puede darse más sobre el calendario de la fecundidad que sobre su intensidad. Más adelante, otra revisión similar con datos de países europeos, también concluiría que los cambios en la fecundidad de período presumiblemente asociados a políticas, parecen pasajeros, y con poco impacto en la fecundidad de cohorte, salvo en casos excepcionales como Estonia y Eslovenia (Frejka & Gietel-Basten 2016). En segundo lugar, se concluyó que lo más habitual es que las políticas tengan efectos heterogéneos, por ejemplo, según paridez.

Cuando surgieron estudios que utilizaron metodologías específicas para controlar la heterogeneidad inobservable a nivel individual y entre países, la heterogeneidad siguió siendo un tema relevante. Por ejemplo, en cuanto a que las políticas de protección que asumen un formato tradicional de familia (es decir: mujeres disponibles para cuidar y transferencias económicas frente a riesgos como desempleo o enfermedad) generan aplazamiento de los primeros nacimientos de las jóvenes y también de las mujeres que se están educando y que tienen mayor edad, mientras que las políticas de inversión social, que asumen que tanto varones como mujeres trabajan remuneradamente y buscan que se reparta más equitativamente el cuidado, también generan aplazamiento al primer hijo, pero al tiempo que fomentan los segundos nacimientos para mujeres de todos los niveles educativos (Billingsley et al. 2018). Además, puede haber efectos heterogéneos en variables más intangibles, como la incertidumbre, que pueden traer una respuesta distinta a las mismas políticas, lo que fue confirmado más recientemente para los países nórdicos, si asociamos incertidumbre a inestabilidad laboral (Hellstrand et al. 2022).

En una línea similar, pudo medirse la importancia de las políticas de equidad de género en 16 países (sobre todo cobertura de servicios de cuidado, pero también licencias o empleo a tiempo parcial) en la fecundidad completa, desde la hipótesis que las normas de género median el efecto de las políticas, generando heterogeneidad entre estratos sociales y haciendo vidrioso el impacto de estas (Baizan et al. 2016). Se concluyó que, al facilitar la compatibilidad de roles y reducir los costes de género de la crianza de los hijos, las políticas que apoyan la igualdad de género conducen a un aumento de los niveles de fecundidad y a una reducción de los diferenciales según el nivel educativo. Además, un alto promedio de horas trabajadas por los varones se relaciona con una fecundidad baja y con gradiente negativo según nivel educativo, lo que vuelve a reforzar la importancia de las relaciones de género. Esto remite a lo dicho anteriormente por Esping-Andersen & Billari (2015) y Arpino et al. (2015) en cuanto a la forma en U de la relación entre fecundidad y equidad de género: hay una asociación positiva entre fecundidad y educación, considerando el efecto de servicios de cuidados, cantidad de horas trabajadas

por los varones y normas de género a nivel individual. La mayoría de los países estarían en un estado de transición de género, en algún lugar de la U (Baizan et al. 2016).

Otra forma de evaluar impactos más específicos ha sido el estudio del ambiente de apoyo a la crianza (instituciones, mercado laboral, varones padres, familias extendidas, entre otras variables), con modelos multinivel y para una veintena de países (Harknett et al. 2014). El resultado muestra una correlación significativa entre ese ambiente y los nacimientos de orden 2 o superior, mientras que la relación con los primeros nacimientos es más bien dudosa, probablemente porque los nacimientos de orden 2 o superior están rodeados por otras consideraciones prácticas de las madres, que ya tienen la experiencia del primer hijo disponible. Además, el trabajo sostiene la relevancia del efecto conjunto de todas las dimensiones mencionadas de ambiente de apoyo a la crianza; no entender esto puede llevar a sobreestimar el peso de cada dimensión por separado.

Finalmente, ha sido posible medir el impacto de medidas concretas en el “rebote” de la TGF de comienzo de este siglo en 18 países de la OCDE, controlando entre otros aspectos las diferencias entre contextos nacionales, la endogeneidad de las políticas y el efecto calendario (Luci-Greulich & Thévenon 2013). Se concluyó que hubo un efecto en la fecundidad probablemente dado por las licencias, servicios de cuidado y transferencias monetarias, pero advirtiendo que esto sucede cuando las medidas se sostienen desde el nacimiento y a lo largo de los primeros años de la infancia. Además, con pesos diferenciales: hay un efecto más importante de las transferencias monetarias posteriores al primer año de vida y de los cuidados infantiles en los primeros tres años de vida, que de las licencias o los beneficios que se otorgan al nacimiento de los hijos.

2.3. Los efectos de cada tipo de medida

A propósito de las medidas específicas, a continuación se sistematizan las principales conclusiones respecto al efecto individual de licencias, flexibilidad laboral, transferencias monetarias y servicios de cuidados, utilizando las revisiones más recientes, fundamentalmente la de Sobotka et al. (2019), pero también trabajos algo anteriores (Thévenon & Gauthier 2011; Luci-Greulich & Thévenon, 2013, Luci & Thévenon 2012; Gauthier 2007, Baizan et al. 2016; Adsera 2004; Kalwij 2010; Šťastná et al. 2019; Cygan-Rehm 2016) que mantienen vigencia en relación con el tema.

Licencias

Las licencias maternales y paternales, así como las parentales (para alguno de los progenitores indistintamente o para ambos) son centrales en los países en donde hay políticas como las que hemos discutido en este documento. En principio, podría esperarse que impulsen al alza la fecundidad al mejorar las condiciones en que se cría, aunque licencias muy largas pueden alejar demasiado a las personas del mercado laboral y desincentivar un nuevo hijo tras la experiencia. La diversidad de formatos de licencias es grande en duración, proporción y universalidad de ingresos a los que se accede, flexibilidad en cuanto al retorno posterior a la licencia, condiciones sobre quienes pueden acceder, y opciones de qué progenitor las utiliza.

En principio, cabe pensar que cuando son bien remuneradas tienen algún efecto sobre la fecundidad, siempre y cuando estén alineadas con una disponibilidad de cuidados que permita cubrir el período entre el nacimiento y el comienzo de los cuidados externos al hogar (Sobotka et al. 2019). De todos modos, este posible efecto no siempre se verifica en las evaluaciones que se han llevado adelante. Por ejemplo, hay estudios que detectaron efectos (en la medida que las licencias tengan cierta duración), pero que se vuelven no significativos ante la TGF ajustada por efecto tiempo (Luci-Greulich & Thévenon 2013), mientras que otros sí los encuentran significativos (Adsera 2004). A la hora de cuantificar el efecto de la forma más precisa posible, se ha concluido que un 10% de incremento en los beneficios ligados a las licencias reduce en un 3,2% la nuliparidez de las mujeres de 36 a 40 años, pero no impacta en la fecundidad completa (Kalwij 2010), que es el indicador que suele ser más impermeable a estos efectos, aun cuando se lo explora en variedad de contextos (Baizán et al. 2016).

En mayor detalle, se observó el efecto de las licencias en los segundos hijos en República Checa y Eslovaquia, encontrando que una mayor flexibilidad y generosidad de las licencias (cortas y bien remuneradas, y flexibles para reducirse en tiempo post segundo nacimiento), redujo el intervalo intergenésico entre el primer y segundo hijo (Šťastná et al. 2019). Antes de eso, ambos países habían incurrido en el propósito de refamiliarizar la crianza, a través de licencias largas y de baja paga (para combatir el desempleo, sacando a las mujeres del mercado laboral), lo que contribuyó a largos intervalos intergenésicos y seguramente hizo descender los nacimientos de orden 2 o más. Más recientemente se verificó una aceleración de la transición a segundos y terceros nacimientos vinculados a la licencia parental remunerada con “*speed premium*” en Estonia (Puur et al. 2023).

Una de las discusiones más importantes en torno a los posibles efectos de las licencias en la fecundidad, que redundaría en una mayor equidad de género en la carga de

cuidado, refiere a cómo se toman estas entre los progenitores. Una opción es que los días de licencia parental puedan ser tomados por madres o padres, a elección de los progenitores, y la otra es que exista una licencia no transferible reservada para padres (“*use it or lose it*”). Esta segunda opción fue utilizada por los países escandinavos, para evitar que la opción recayese siempre en las mujeres, perpetuando el rol de mujer como cuidadora fundamental, dado que estas eran quienes la tomaban mayoritariamente.

Tomando todo esto en cuenta, incluida la dificultad a la hora de encontrar un efecto universal y significativo en los nacimientos, es necesario pensar en los objetivos de las licencias como un terreno vinculado a una mayor cantidad de dimensiones, además de la fecundidad. Por lo pronto, el bienestar del niño, la redistribución de la carga de cuidados, la consolidación del apego en los primeros tiempos de contacto y la promoción de un mayor involucramiento de los padres. Por tanto, para su diseño deben ser contempladas y pensadas más allá de la intención de algunos países de usarlas para dar impulso a la fecundidad.

Flexibilidad laboral

La flexibilidad laboral, entendida como el ajuste de condiciones de trabajo generando mejores circunstancias para la crianza, también puede tener efecto en la fecundidad, dado que la rigidez de las condiciones y tiempos laborales dificulta la compatibilidad de la vida familiar y laboral. En términos de su implementación concreta hay aún más variabilidad que en el caso de las licencias. Las medidas pueden ir desde poder ingresar o reingresar fácilmente al mercado de trabajo, hasta tener horarios ajustables para el cuidado de los hijos, o días de licencia específicos para las múltiples vicisitudes de la crianza.

Para comenzar, hay evidencia en favor de un efecto positivo sobre la fecundidad en quienes tienen trabajos de medio horario, especialmente entre las mujeres de mayor nivel educativo (Baizán et al. 2016), pero es necesario hacer varias puntualizaciones. Los empleos a medio horario solo son una solución si garantizan condiciones semejantes a los de horario completo, pero no si ambas modalidades conforman un mercado de trabajo fragmentado en que el tránsito entre ambos modelos se haga muy trabajoso. Si se trata de que la mujer y el varón con hijos sean considerados por sus empleadores como alguien que cría, y no como un trabajador siempre disponible, es necesario que el propio esquema cotidiano de trabajo sea flexible, lo que de hecho se ha vinculado con el aumento de las intenciones reproductivas (Harknett et al. 2014; Sobotka et al. 2019). Desde esta óptica, las condiciones tecnológicas hacen más viable la flexibilización mediante el llamado *flexiwork* o *flexitime*, es decir la adecuación de las coordenadas de tiempo y

espacio, que manejadas de forma favorable para quienes trabajan podría hacer compatibilizar mejor el trabajo remunerado y la crianza.

De todos modos, estas condiciones deben redundar en un tiempo de trabajo más corto para mujeres y varones, más que en un tiempo largo pero flexible, pues unas de las conclusiones más relevantes de los estudios al respecto es que en los países europeos donde los varones trabajan una media de 38 horas semanales hay una fecundidad de cohorte cercana a 1,8 hijos, mientras que allí donde trabajan 45 horas, la fecundidad está en el entorno de 1,45 hijos (Baizán et al. 2016). A su vez, la flexibilización de la jornada laboral redunda en un efecto positivo en la igualdad de género, dado que promueve cambios en el rol familiar de los padres de mayor involucramiento en la crianza (Plantenga et al. 2010; Haas & Hwang 2019). Tal como en el caso de las licencias, se trata de medidas que podrían tener valor más allá de su impacto en la fecundidad.

Transferencias monetarias

Los incentivos económicos son quizá las medidas más debatidas, y donde más a menudo puede observarse un énfasis pronatalista. Se trata de transferencias que pueden expresarse en exenciones fiscales o diferentes tipos de transferencias monetarias, puntuales o permanentes. Ante este tipo de medidas, las investigaciones a menudo buscan cuantificar cuánto modifica la fecundidad cada peso invertido, de manera de poder evaluar la política en términos de costo-eficiencia y eventualmente describir su funcionamiento con mayor detalle; por ejemplo, los umbrales de magnitud a partir de los cuales podría apreciarse un efecto. Además, las circunstancias demográficas y socioeconómicas de cada país son un factor de variabilidad, generando un efecto diferencial de este tipo de medidas. Generalmente, las investigaciones han mostrado que es inusual que generen un impacto sobre la fecundidad completa de las cohortes; aunque alguna vez se lo ha detectado, pero pequeño y concentrado en poblaciones de bajos recursos y bajo nivel educativo (Sobotka et al. 2019).

En los estudios específicos de este tipo de medidas es notorio que los pagos únicos, conocidos como *baby bonus* (una transferencia por cada hijo recién nacido) son objeto de las polémicas más encendidas, porque resultan dudosos en su efectividad. Un buen resumen de sus posibles efectos se encuentra en Thévenon & Gauthier (2011), quienes asumen que puede haber un efecto positivo pero pequeño y de corto plazo, sin certeza sobre cuánto puede impactar en la fecundidad completa de las cohortes. Otros estudios estiman, de forma similar, que incrementar en 10% el ingreso disponible en las familias con hijos podría incrementar en 0,02 la TGF (D'Addio & Mira d'Ercole 2005; Luci-Greulich & Thévenon 2011), un impacto pequeño pero mayor que el de 0,07 por

cada aumento del 25% de los ingresos estimado anteriormente (Gauthier & Hatzius 1997). Y también existen estudios que asumen que la mayoría de este impacto podría ser espurio (Kalwij 2010).

En cualquier caso, la línea más sólida de evidencia respalda la existencia de efectos, aunque menores, en el caso de transferencias altamente permanentes en el tiempo (Luci-Greulich & Thévenon 2013; Sleenbos 2003), mientras que no está firmemente establecido el efecto en el calendario de la fecundidad (Mills et al 2011, Cohen et al 2007; Milligan 2005). Finalmente, las exenciones tributarias parecen tener efecto en algún caso como en Hungría (Aassve et al. 2006) pero no para la mayoría de los contextos estudiados (Whittington 1992; Zhang et al. 1994; Kearny 2004; Gauthier 2007)

En definitiva, el costo directo de los niños es alto, y en general las transferencias cubren muy poco del total. Además, podría ser que el impacto sea solo en el corto plazo, o que los padres usen las transferencias en mejorar la vida de los hijos ya nacidos, pero no en tener más (dado el cambiante equilibrio *cantidad vs calidad*). Por otra parte, si este tipo de políticas implica desembolsos altos, su implementación es costosa y los gobiernos no tienden a mantenerlas mucho tiempo. Aun así, siguen en el centro del debate y son las medidas a las que suelen recurrir los gobiernos en primera instancia cuando asumen un punto de vista de “incentivos a la natalidad”.

Servicios de cuidados infantiles

Finalmente, el posible efecto de los servicios de cuidado infantil en la fecundidad es una de las preguntas más relevantes si se considera la difícil conciliación laboral-familiar, el creciente costo indirecto de los hijos, y la concentración de la crianza en las mujeres, como los nudos más importantes del equilibrio societal propio de una revolución de género incompleta (McDonald 2006, Goldscheider et al. 2015; Esping-Andersen 2009) y las claves de la baja o muy baja fecundidad.

Por ese motivo, tienen centralidad en los estudios de este tipo, donde se ha demostrado la potencialidad de estas políticas en la primera infancia. (Mills et al. 2011; Rindfuss et al. 2007), su capacidad de tener efecto acumulativo con otros instrumentos (Luci-Greulich & Thévenon 2013) y su potencia aun cuando se trate de cuidados informales (Hank & Kreyenfeld 2003). La disponibilidad de cuidados infantiles ha mostrado ser importante en la decisión de tener hijos o no, incluso en quienes aún no han tenido ninguno, más allá de que no siempre este efecto puede identificarse de modo estrictamente causal (Thévenon & Gauthier 2011). En términos de calendario, existen estudios que identifican un vínculo entre gasto en servicios de cuidado y adelantamiento

de los nacimientos para países de la OCDE (D'Addio & Mira d'Ercole 2005), mientras otros muestran un efecto en los nacimientos de orden 2 y en la fecundidad completa de las cohortes (Hilgeman & Butts 2009; Kalwij 2010).

Durante un largo tiempo, los casos considerados más exitosos de políticas familiares (los países escandinavos y Francia, entre los principales) fueron también aquellos que consiguieron elevarse y mantenerse sostenidamente por encima del umbral de una TGF de 1,5 a causa de un marco de políticas fuertemente basado en servicios de cuidado infantil. Si bien los datos ya no permiten decir lo mismo, porque en varios de esos países la fecundidad de período ha vuelto a caer, los servicios de cuidado siguen siendo componentes centrales de cualquier estrategia, dada su capacidad de bajar los costos indirectos de la crianza, mejorar la distribución de los cuidados desde la corresponsabilidad en la familia y fuera de ella y otorgar a los niños un ámbito en el que pueda promoverse el aprendizaje en los términos adecuados a la primera infancia. Por ejemplo, como se demostró a través de simulaciones basadas en datos alemanes, el subsidio a servicios de cuidado, en conjunto con la condicionalidad de que trabaje la madre, aumenta la participación laboral de las mujeres y también las tasas de fecundidad de las mujeres sin hijos y de alta educación (Haan & Wrohlich 2011).

Las principales conclusiones sobre la provisión de cuidados infantiles públicos asumen que es el tipo de medida que más claramente puede generar un efecto positivo en la fecundidad completa de las cohortes durante un buen tiempo. Pero esto sucede solo si los cuidados son a) de calidad, b) disponibles para niños de todas las edades, sobre todo menores de tres años, pero también niños en edad escolar a contra horario, c) con horarios que abarquen desde muy temprano en la mañana hasta el fin de la jornada y d) que no sean costosos (Sobotka et al. 2019).

3. La discusión sobre políticas ante “la gran caída” de la fecundidad uruguaya

Los países de América Latina, que van llegando en gran número a niveles de fecundidad muy baja, están procesando discusiones similares a las que tuvieron lugar en las poblaciones europeas o asiáticas que llegaron antes a estos niveles. En el caso uruguayo, donde “la gran caída” (Cabella et al. 2023) de la TGF fue de una velocidad inusual (de 1,9 a 1,3 en seis años), los debates sobre políticas se han intensificado, tanto desde el sistema político como en la opinión pública y los medios de comunicación.

Aunque no siempre se toma en cuenta, es necesario considerar que las medidas que podrían tomarse se entrelazan con una matriz de protección social que ya contiene aspectos de política familiar, en algunos casos desde la primera mitad del siglo XX. En ese momento, Uruguay consagró un sistema institucionalizado de políticas sociales de carácter universalista y de amplia cobertura en el campo educativo, laboral y de salud, con capacidad de incorporar a la mayoría de la población urbana y más tardíamente a los trabajadores rurales. En la actualidad, la literatura ubica a Uruguay como un país con un régimen de bienestar intermedio, entre aquellos en el que la mayoría de la población se encuentra protegida desde la intervención estatal (típicamente en los países más desarrollados) y los de seguridad informal, tradicionales de América Latina, en donde el bienestar se genera en gran medida con apoyo de redes sociales y familiares (Midaglia & Antía 2007). Adicionalmente, en términos de cobertura estatal, se lo ha definido como un sistema estructurado sobre prestaciones de carácter universal en educación, a la vez que relativamente estratificado en materia sanitaria y de seguridad social (González Laurino & Leopold 2018).

En este marco, hay diversas políticas sociales que se relacionan con la fecundidad, y que algunos autores interpretan como propias del país de América Latina que más se ha movido del familismo a la corresponsabilidad en materia de cuidados (Barbosa et al 2023), aunque esto no implique más que el destaque de una posición relativa al resto de los países de la región. Para empezar, la normativa de licencia por maternidad contempla 13-14 semanas con el 100% del salario para el cuidado del recién nacido. Una vez finalizada la licencia por maternidad, hay licencias parentales que reducen en medio horario la jornada laboral y pueden tomar la madre o el padre (alternadamente) hasta los 6 meses de edad del niño, con la financiación del 100% del pago de las horas reducidas. Más allá de los problemas vinculados a la alta proporción de trabajadores informales (20,9%), que no pueden acceder a estas licencias, es relevante observar la dinámica de género vinculada a las licencias parentales: en 2021, solo 33 varones reclamaron la licencia, frente a 2132 mujeres, lo que ha suscitado algunas intervenciones

para motivar un cambio en la tendencia (Querejeta & Bucheli 2023). Las razones esgrimidas para no hacer uso del medio horario difieren por sexo: las razones de los varones están vinculadas a los roles de género, por concebir a la mujer como la mejor cuidadora, más allá de la dinámica de la lactancia. Entre las mujeres, las razones se vinculan a los costos que impone el mercado laboral por pérdida de ingresos o perjuicios en la dinámica de trabajo (Batthyány et al. 2018).

En cuanto a los servicios de cuidado infantil, Uruguay considera obligatoria la asistencia a un centro educativo a partir de los 4 años y ofrece Centros de Educación Inicial para niños entre 4 y 5 años con una cobertura diaria de cuidado, mayoritariamente de 4 horas. Con la creación en 2015 del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) han surgido los Centros de Atención a la Infancia y la Familia, que cubren la atención de niños menores a 4 años, y alcanzan el 75% de cobertura en los de 3 años.

Los apoyos económicos también existen, aunque no tienen entre sus propósitos explícitos ser un incentivo de fomento de la natalidad. Las transferencias monetarias como las Asignaciones Familiares o la Tarjeta Uruguay Social, por lo pronto, tienen como objetivo aliviar la pobreza en los hogares con niños. Sin embargo, la cobertura de estas prestaciones no es completa en hogares donde ninguno de los padres trabaja (79%) o donde trabajan, pero ninguno accede a un vínculo formal (90%) (Galván et al 2021). Los descuentos impositivos por Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) por cada hijo menor de edad a cargo pueden verse como otra forma de apoyo económico, aunque tampoco resulta universal, dado que los hogares de menores ingresos, donde se concentra la natalidad, no pagan IRPF (Carnevale & Novas, 2016).

Así, las discusiones en Uruguay no surgieron desde un total consenso acerca del objetivo final de política, que podría vincularse a una suba de la TGF a nivel agregado, o a una mayor satisfacción de las personas con el tamaño de su descendencia a nivel individual, pero generaron un proyecto desde el sistema político. Tratado a nivel parlamentario en 2022, se ha orientado fundamentalmente hacia el primero de estos enfoques: declara de interés nacional la implementación de políticas que fomenten el aumento de la natalidad, aunque sin fijar metas cuantitativas al respecto, y promueve una serie de medidas (además, en 2023 trascendió que el parlamento considerará la creación de una comisión de expertos para discutir el tema de la baja fecundidad en su conjunto).

El proyecto parlamentario de 2022 se tradujo en una serie de medidas recomendadas al Poder Ejecutivo en una minuta donde se reafirma la mencionada idea del fomento de la natalidad como un objetivo del estado uruguayo y se conecta el número de nacimientos a la viabilidad del sistema previsional, cuya reforma se estaba discutiendo en el país. Sobre todo, desde la idea de que el aumento de la razón de

dependencia demográfica pondría en riesgo el pilar de solidaridad intergeneracional del actual sistema mixto. A su vez, el proyecto asume que el factor central por el cual las personas no tienen hijos es económico, por lo que entienden que es necesario generar una política que “despeje la variable económica como factor de decisión” de las parejas.

Las medidas sugeridas son a) una mayor deducción por hijo del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), b) el incremento de la licencia por paternidad, adopción y legitimación adoptiva a 45 días para los padres al momento del nacimiento y la posibilidad de usufruirla dentro de los primeros dos años de vida del niño y c) el establecimiento de un incentivo para las empresas que establezcan centros de cuidados gratuitos para los hijos de los trabajadores.

Como puede verse, la propuesta contempla diversos énfasis: si la contrastamos con las posibles tipologías que emergen de la acumulación internacional, se destaca el peso de los incentivos económicos y las licencias, aunque en ambos casos sin innovaciones de gran magnitud. Una de las preocupaciones que puede despertar es su posible impronta regresiva, dado que aproximadamente es el 30% de la población ocupada la que paga IRPF, y por tanto tendría la capacidad de efectuar exenciones fiscales (MEF-DGI, 2020). Pero además es muy dudosa su capacidad de impacto, dado que los centros de cuidados de las empresas son un incentivo razonable para aquellas de tamaño considerable y en Uruguay sólo el 40% de las personas ocupadas trabaja en una empresa de más de 50 empleados (ECH/INE 2022). El incremento de las licencias, por otra parte, permitiría un mayor involucramiento de los padres con los hijos en los primeros años de vida, fomentando la conciliación del trabajo remunerado y no remunerado, pero no necesariamente puede esperarse que los cambios propuestos impacten de forma considerable.

En suma, aunque no está claro en qué medida el Poder Ejecutivo seguirá estas recomendaciones (o las que surjan luego de la comisión de expertos sugerida en 2023), el tema seguirá en agenda, dada la consolidación de la baja fecundidad y el envejecimiento como atributos distintivos del actual régimen demográfico del país. En ese escenario, es central tener presentes las peculiaridades de poblaciones latinoamericanas como la uruguaya (de importante desigualdad, descenso particularmente veloz de la fecundidad agregada, descenso muy reciente de la fecundidad adolescente, y aumento de la edad al primer hijo como transición aún en marcha), junto con la evidencia disponible de las políticas implementadas en poblaciones europeas y asiáticas.

Además, es necesario poner en cuestión la idea del aumento de la natalidad como objetivo fundamental, e insistir en que la evidencia sugiere la necesidad de objetivos de mejora de las condiciones de crianza, más que cualquier otra cosa. No solo porque

sostener políticas así podría generar un ambiente amigable con la concreción futura de intenciones reproductivas hoy frustradas, sino porque es necesario para mejorar el bienestar de los niños ya nacidos (crucial en un país donde la proporción de pobreza infantil duplica a la total) y de los adultos que ejercen de padres y madres, de quienes es razonable esperar y acaso promover que se inserten en el mercado de trabajo con una brecha de género cada vez menos significativa, y puedan criar y trabajar sin que el sacrificio relativo a esa etapa les lleve a renunciar a alguna de estas dimensiones de la vida. Finalmente, no está de más apuntar que la medición de la fecundidad uruguaya no debiera limitarse al indicador de la TGF de período, cuyo valor de 2022 la ubica en niveles ultra-bajos y hace sonar alarmas a menudo excesivas: dada la dinámica reproductiva que lo hizo caer a esos niveles y su propia construcción como indicador, existe una razonable expectativa de cierto “rebote” parcial en los próximos años (Cabella et al. 2023).

4. Consideraciones finales

Como ha señalado McDonald (2006), la incertidumbre asociada a la desregulación laboral ha roto el viejo balance trabajo-familia, que varios Estados han intentado reconstituir desde políticas públicas y cambios institucionales, para que los jóvenes y adultos sean padres con niveles más aceptables de pérdida económica y de impacto en sus aspiraciones individuales. En un contexto en que el costo directo e indirecto de los hijos ha ido subiendo (Harknett et al 2014), podría existir la tentación, presente en el actual proyecto del parlamento uruguayo, de simplificar la lógica de las medidas posibles hasta pensarla como un plan para abatir costos. Sin embargo, los costos no solo son más altos sino también más complejamente conformados y estratificados. Es posible que una parte muy grande de la población sea inmune a las políticas que disminuyen los costos directos, si no se modifican los indirectos. Por eso un abordaje complejo y multidimensional debería utilizar variedad de instrumentos, atendiendo múltiples aspectos del bienestar familiar e individual.

Toda la evidencia repasada muestra la complejidad de encontrar un vínculo causal inequívoco entre las posibles medidas y la fecundidad completa de las cohortes. Aun así, permite sacar conclusiones; entre ellas, que las transferencias financieras impactan sobre (una parte del) costo directo, pero las políticas de conciliación (licencia, flexibilidad, cuidados) podrían abatir más eficientemente el costo de oportunidad de tener el primer hijo y reducir la heterogeneidad social. Más importante aún, la evidencia llama la atención acerca de que un efecto en la fecundidad final requiere un conjunto coherente de políticas, con amplio acceso a cuidados infantiles y transferencias a lo largo de la infancia. Sobre todo, si esa coherencia y estabilidad logra bajar la incertidumbre del contexto en el que las familias toman decisiones sobre fecundidad. Además, aunque no lo hemos tratado aquí, el tema de la disponibilidad pública de tecnologías de reproducción asistida, disminuyendo o abatiendo totalmente sus costos, refiere a políticas que podrían aumentar, aunque mínimamente, la fecundidad, y que conviene tener en cuenta como parte de las medidas que serán protagónicas en los años por venir en los países de fecundidad más baja y tardía.

También importa la focalización. Hay países en los que las políticas varían mucho según paridez, como el Capital Maternal de Rusia, que incentiva segundos hijos, en un contexto en el que esos ingresos podrían ser más útiles al comienzo de la vida familiar o de pareja. También podría estar mal focalizada una política que no conecta con las necesidades percibidas por las personas o que ignora las necesidades de las minorías (parejas del mismo sexo, madres solteras, trabajadores informales), como los países asiáticos, cuyas políticas a menudo que se centran en los matrimonios. Esto nos lleva a

las consideraciones éticas. No solo deben las políticas atender los derechos reproductivos y no ser coercitivas; además, no deberían discriminar ningún grupo ni imponer miradas normativas sobre las familias deseables.

En definitiva, las políticas, además de coherentes, consistentes y sostenibles en el largo plazo, deben tomar en cuenta los cambios recientes, incluida la diversidad familiar, la paternidad y maternidad más tardías, las redes de apoyo externas al hogar, e incluso las aspiraciones laborales o de ocio de las personas con hijos. Todo esto, además, en un marco de incertidumbre económica, inmobiliaria y relacional endémica. Si las políticas tienen muchas idas y vueltas y reformas, o funcionan como varias capas geológicas de intervenciones descoordinadas, se vuelven poco confiables, y su efecto podría diluirse aun con una alta inversión. La apuesta de Rusia o de varios países de Europa Oriental como Hungría, insuficiente para modificar establemente el comportamiento reproductivo (y mucho menos el de las familias y mujeres con mejor inserción laboral y nivel educativo), puede llevar a malgastar recursos a menudo muy cuantiosos.

Las políticas pronatalistas pueden tener además efectos no deseados. Estudios como el de Botev (2015) recuerdan el caso de políticas con largas licencias maternales, que pueden durar hasta 3 años, pero con escasos arreglos para la reincorporación, lo que perjudica la empleabilidad de las mujeres seriamente. Además, parte de la investigación psicológica y económica sobre estos temas ha sugerido que, bajo ciertas condiciones, los incentivos extrínsecos pueden horadar la motivación intrínseca de algunas partes de la población (McCausland et al. 2005; Boccuzzo et al. 2008). En cualquier caso, las políticas deben enfocarse en darle a los padres autonomía suficiente para decidir si tener hijos, cuándo y cuántos y en facilitarles la tarea, porque los incentivos para tener aumentos de corto plazo quizá disminuyan la motivación en el largo, si es cierto que tener y criar hijos son decisiones sobre todo intrínsecamente motivadas y que las intervenciones que apuntan a forzar un comportamiento podrían tender a disminuir la motivación por la crianza (Botev 2015).

En suma, es necesario que el debate incluya la discusión de los objetivos que deben tener las políticas familiares en un contexto de baja fecundidad. Como Gietel-Basten et al. (2022) y otros trabajos recientes han remarcado, los gobiernos que entienden necesario incentivar el aumento de la natalidad, sin otras consideraciones, pueden afectar negativamente la equidad de género en el mercado laboral y el ámbito doméstico (y eventualmente descuidar los derechos asociados a la salud sexual y reproductiva) pero además tampoco suelen lograr un aumento sostenido de la fecundidad de las cohortes.

Referencias

- Aassve, A., Billari, F. C., & Spéder, Z. (2006). Societal transition, policy changes and family formation: Evidence from Hungary. *European Journal of Population*, 22, 127-152.
- Adsera, A. (2004). Changing fertility rates in developed countries. The impact of labor market institutions. *Journal of population economics*, 17, 17-43.
- Andersson, G. (2004). Childbearing developments in Denmark, Norway, and Sweden from the 1970s to the 1990s: A comparison. *Demographic Research*, 3, 155-176.
- Andersson, G., Hoem, J. M., & Duvander, A. Z. (2006). Social differentials in speed-premium effects in childbearing in Sweden. *Demographic Research*, 14, 51-70.
- Arpino, B., Esping-Andersen, G., & Pessin, L. (2015). How do changes in gender role attitudes towards female employment influence fertility? A macro-level analysis. *European Sociological Review*, 31(3), 370-382.
- Baizan, P., Arpino, B., & Delclós, C. E. (2016). The effect of gender policies on fertility: The moderating role of education and normative context. *European Journal of Population*, 32, 1-30.
- Balbo, N., Billari, F. C., & Mills, M. (2013). Fertility in advanced societies: a review of research. *European Journal of Population*, 29, 1-38.
- Barbosa, P., Fabris, L., Abbas, L., Caruso, G., Giusti, V. & Coimbra, B. (2023) Moving away from familism by default? The trends of family policies in Latin America, *Third World Quarterly*, 44:8, 1865-1883
- Bátthyany, K., Genta, N., & Perrotta, V. (2018). *Uso de licencias parentales y roles de género en el cuidado*, Montevideo: SNIC
- Bernhardt, E., Noack, T., & Lyngstad, T. H. (2008). Shared housework in Norway and Sweden: advancing the gender revolution. *Journal of European Social Policy*, 18(3), 275-288.
- Billari, F. (2018) "A 'Great Divergence' in Fertility?" En: Poston (ed), *Low Fertility Regimes and Demographic and Societal Change*, Springer, pp. 15-35
- Billingsley, S., Neyer, G., & Wesolowski, K. (2018). The influence of family policies on womens childbearing: A longitudinal micro-data analysis of 21 countries. Stockholm University, *Stockholm Research Reports in Demography*, 19.
- Biryukova, S., Sinyavskaya, O., & Nurimanova, I. (2016). "Estimating effects of 2007 family policy changes on probability of second and subsequent births in Russia". Higher School of Economics Research Paper No. 68
- Boccuzzo, G., Caltabiano, M., Zuanna, G. D., & Loghi, M. (2008). The impact of the bonus at birth on reproductive behaviour in a lowest-low fertility context: Friuli-Venezia Giulia (Italy), 1989-2005. *Vienna Yearbook of Population Research*.
- Botev, N. (2015). Could pronatalist policies discourage childbearing? *Population and Development Review*, 41(2), 301-314

- Cabella, W., Fernández Soto, M., Pardo, I. & Pedetti, G. (2023). “La gran caída. El descenso de la fecundidad uruguaya a niveles ultra-bajos (2016 - 2021)”, Programa de Población, Documentos de Trabajo, No. 11
- Carnevale, M. & Novas, V. (2016). “Equidad vertical del sistema de imposición a las rentas de las personas físicas en Uruguay”. Documento de Trabajo. Ministerio de Economía y Finanzas
- Castles, F. G. (2003). The world turned upside down: below replacement fertility, changing preferences and family-friendly public policy in 21 OECD countries. *Journal of European Social Policy*, 13(3), 209-227.
- CEA (2019). “FROGEE Policy Brief 1: Insights from Poland”, Policy Brief Series 1
- Cohen, A., Dehejia, R., & Romanov, D. (2007). “Do financial incentives affect fertility?”. National Bureau of Economic Research, No. w13700
- Cygan-Rehm, K. (2016). Parental leave benefit and differential fertility responses: Evidence from a German reform. *Journal of Population Economics*, 29, 73-103.
- D'Addio, A. C., & d'Ercole, M. M. (2005). “Trends and determinants of fertility rates: The role of policies”. OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 27
- de Bruijn, B. J. (1999). *Foundations of demographic theory. Choice, Process, Context*. Amsterdam: Thela Thesis
- Demeny, P. (2003). Population policy dilemmas in Europe at the dawn of the twenty-first century. *Population and Development Review*, 29(1): 1–28
- Duvander, A. Z., Lappegård, T., & Andersson, G. (2010). Family policy and fertility: Fathers' and mothers' use of parental leave and continued childbearing in Norway and Sweden. *Journal of European Social Policy*, 20(1), 45-57.
- ECH/INE (2022). *Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística*, Montevideo: INE
- Elizarov, V., & Levin, V. (2015). “Family policies in Russia: could efforts to raise fertility rates slow population aging?”, The World Bank Group WP 99503
- Esping-Andersen, G. (2009). *Incomplete revolution: Adapting welfare states to women's new roles*. UK: Polity.
- Esping-Andersen, G., & Billari, F. (2015) Re-theorizing family demographics. *Population and Development Review*, 41(1), 1-31.
- Frejka, T., & Gietel-Basten, S. (2016). Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990. *Comparative Population Studies* 41 (1), 3–56.
- Frejka, T., & Zakharov, S. (2013). The apparent failure of Russia's pronatalist family policies. *Population and Development Review* 39(4), 635-647.
- Frejka, T., Sobotka, T., Hoem, J. M., Toulemon, L. (eds.) (2008). *Childbearing trends and policies in Europe*. Amsterdam: BoD–Books on Demand.
- Gábos, A., Gál, R. I., & Kézdi, G. (2009). The effects of child-related benefits and pensions on fertility by birth order: A test on Hungarian data. *Population studies*, 63(3), 215-231.

- Galván, E., Parada, C., Querejeta, M. & Salvador, S., (2021), “Licencias para el cuidado de los recién nacidos: Relevamiento internacional y análisis de la situación en Uruguay”, IECON-Udelar, Documentos de Trabajo, No. 17
- Gauthier, A. (2007). The impact of family policies on fertility in industrialized countries: a review of the literature. *Population Research and Policy Review*, 26, 323-346.
- Gauthier, A. & Hatzius, J. (1997). Family benefits and fertility: An econometric analysis. *Population Studies*, 51(3), 295-306.
- Gietel-Basten, S., Rotkirch, A., & Sobotka, T. (2022). Changing the perspective on low birth rates: why simplistic solutions won't work. *BMJ*, 379, 1-4.
- Goldscheider, F., Bernhardt, E., & Lappegård, T. (2015). The gender revolution: A framework for understanding changing family and demographic behavior. *Population and Development Review*, 41(2), 207-239.
- González Laurino, C. & Leopold, S. (2018). Transformaciones en la matriz de protección uruguaya a inicios del siglo XXI, *Textos y Contextos*, 17(1), 52-66
- Kalwij, A. (2010). The impact of family policy expenditure on fertility in Western Europe. *Demography*, 47(2), 503-519.
- Kaufman, G., & Bernhardt, E. (2012). His and her job: What matters most for fertility plans and actual childbearing? *Family Relations*, 61: 686-697
- Kapitány, B., & Spéder, Z. (2018). “Fertility”. En: Monostori, J, Ori, P. & Spéder, Z. *Demographic Portrait of Hungary 2018*, 49-66.
- Haan, P. & Wrohlich, K. (2011). Can child care policy encourage employment and fertility? *Labour Economics*, 18, 498–512
- Haas, L., & Hwang, C. P. (2019). Policy is not enough—the influence of the gendered workplace on fathers’ use of parental leave in Sweden. *Community, Work & Family*, 22(1), 58-76.
- Hank, K., & Kreyenfeld, M. (2003). A multilevel analysis of child care and women's fertility decisions in Western Germany. *Journal of marriage and family*, 65(3), 584-596.
- Harknett, K., Billari, F. C., & Medalia, C. (2014). Do family support environments influence fertility? Evidence from 20 European countries. *European Journal of Population*, 30, 1-33.
- Hellstrand, J., Nisén, J., & Myrskylä, M. (2022). “Educational field, economic uncertainty, and fertility decline in Finland in 2010–2019”. INVEST-Working Paper 55
- Hilgeman, C., & Butts, C. T. (2009). Women’s employment and fertility: A welfare regime paradox. *Social Science Research*, 38(1), 103-117.
- Hoem, J. M. (2005). Why does Sweden have such high fertility? *Demographic Research*, 13, 559-572.
- Hoem, J. M. (2008). Overview Chapter 8: The impact of public policies on European fertility. *Demographic Research*, 19, 249-260.

- Kaufman, G., & Bernhardt, E. (2012). His and her job: What matters most for fertility plans and actual childbearing?. *Family Relations*, 61(4), 686-697.
- Kearney, M. (2004). Is There an Effect of Incremental Welfare Benefits on Fertility Behavior? A Look at the Family Capital. *Journal of Human Resources*, s 39(2): 295-325
- Luci-Greulich, A., & Thévenon, O. (2013). The Impact of Family Policies on Fertility Trends in Developed Countries. *European Journal of Population*, 29, 387-416.
- Magda I., Kielczewska A. & Brandt N. (2020). The effect of child benefit on female labor supply. *IZA Journal of Labor Policy*, 10(1), 1-18
- Matsukura, R., Retherford, R.D., & Ogawa, N. (2007). Declining fertility in Japan: Its mechanisms and policy responses. *Asia-Pacific Population Journal*, 22(2), 33-50
- Matysiak, A. & Szalma, I. (2014). Effects of parental leave policies on second birth risks and women's employment entry. *Population*, 69(4), 599-636.
- McCausland, W. D., Pouliakas, K., & Theodossiou, I. (2005). Some are punished and some are rewarded: A study of the impact of performance pay on job satisfaction. *International Journal of Manpower*, 26(7/8), 636-659.
- McDonald, P. (2006). Low fertility and the state: The efficacy of policy. *Population and Development Review*, 485-510.
- MEF-DGI (2020). Resumen de resultados del Impuesto a las Personas Físicas y del Impuesto de la Asistencia a la Seguridad Social- Ejercicio 2020.
- Midaglia, C. & Antía, F. (2007). La izquierda en el gobierno: ¿cambio o continuidad en las políticas de bienestar social?. *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 16, 131-157
- Miljkovic, D., & Glazyrina, A. (2015). The impact of socio-economic policy on total fertility rate in Russia. *Journal of Policy Modeling*, 37(6), 961-973.
- Milligan, K. (2005). Subsidizing the stork: New evidence on tax incentives and fertility. *Review of Economics and Statistics*, 87(3), 539-555.
- Mills, M., Rindfuss, R., McDonald, P. & Te-Velde, E. (2011). Why Do People Postpone Parenthood? Reasons and Social Policy Incentives. *Human Reproduction Update*, 17, 848-860
- Naciones Unidas (2022). "Perspectivas de la población mundial 2022: conjunto de datos". Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población
- Neyer, G., & Andersson, G. (2008). Consequences of family policies on childbearing behavior: Effects or artifacts? *Population and Development Review*, 34(4), 699-724.
- OECD (2019). "OECD Family Database. Data on government spending on family benefits and childcare and education enrollment"
- Pardo, I., Varela, C., & Pollero, R. (2011). *Políticas de fecundidad: sistematización de experiencias y recomendaciones para el caso uruguayo*. Montevideo: OPP

- Pardo, I., & Varela, C. (2013). La fecundidad bajo el reemplazo y las políticas familiares en América Latina y el Caribe: qué puede aprenderse de la experiencia europea. *Revista Brasileira de Estudos de População*, 30, 503-518.
- Pardo, I. (2019.) “El rol de las intenciones en el comportamiento reproductivo: modelos explicativos y opciones de medición” Documento de Trabajo FCS-PP No. 5
- Philipov, D. (2009). Fertility Intentions and Outcomes: The Role of Policies to Close the Gap. *European Journal of Population*, 25(4), 355-361.
- Plantenga, J., Remery, C., & Camilleri-Cassar, F. (2010). *Flexible working time arrangements and gender equality: A comparative review of 30 European countries*, Luxembourg: Publications Office of the European Union
- Puur, A., Abdullayev, S., Klesment, M., & Gortfelder, M. (2023). Parental Leave and Fertility: Individual-Level Responses in the Tempo and Quantum of Second and Third Births. *European Journal of Population*, 39(1), 22.
- Querejeta, M., & Bucheli, M. (2023). The Effect of Childbirth on Women’s Formal Labour Market Trajectories: Evidence from Uruguayan Administrative Data. *The Journal of Development Studies*, 59(2), 209-223.
- Rindfuss, R. R., Guilkey, D. K., Morgan, S. P., & Kravdal, Ø. (2010). Child-care availability and fertility in Norway. *Population and Development Review*, 36(4), 725-748.
- Rindfuss, R. R., Guilkey, D., Morgan, S. P., Kravdal, Ø., & Guzzo, K. B. (2007). Child care availability and first-birth timing in Norway. *Demography*, 44, 345-372.
- Rossy, K. M. (2011). Politicizing Pronatalism: Exploring the Nazi Ideology of Women through the Lens of Visual Propaganda, 1933–1939. *The Graduate History Review*, 3(1)
- Sleeboos, J. (2003). “Low fertility rates in OECD countries: facts and policy responses”. OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 15
- Sobotka, T., & Beaujouan, É. (2014). Two Is best? The persistence of a two-child family ideal in Europe. *Population and Development Review*, 40(3), 391-419.
- Sobotka, T., Matysiak, A., & Brzozowska, Z. (2019). “Policy responses to low fertility: How effective are they”. UNFPA, Technical Division Working Paper Series No. 1
- Spéder, Z., Murinkó, L., & Oláh, L. S. (2020). Cash support vs. tax incentives: The differential impact of policy interventions on third births in contemporary Hungary. *Population Studies*, 74(1), 39-54.
- Spéder, Z. (2016). Fertility decline and the persistence of low fertility in a changing policy environment—A Hungarian case study. En: Rindfuss, R.R. and Choe, M.K. (eds.) *Low Fertility, Institutions, and their Policies*. Springer International Publishing, pp. 165-194.
- Spéder, Z., & Kamarás, F. (2008). Hungary: Secular fertility decline with distinct period fluctuations. *Demographic Research*, 19, 599-664.
- Štastná, A., Kocourková, J., & Šídlo, L. (2019). Reproduction ageing in Czechia in the European context. *Casopis Lekarů Ceských*, 158(3-4), 126-132.

- Thévenon, O. (2009). Increased women's labor force participation in Europe: Progress in the work-life balance or polarization of behaviours? *Population*, 64(2), 235-272.
- Thévenon, O., & Gauthier, A. H. (2011). Family policies in developed countries: A “fertility-booster” with side-effects. *Community, Work & Family*, 14(2), 197-216.
- Thévenon, O. (2016) The influence of family policies on fertility in France: Lessons from the past and prospects for the future. En: Rindfuss, R.R. and Choe, M K. (eds.) *Low fertility, Institutions and their Policies. Variations across Industrialized Countries*. Springer International Publishing, pp. 49-76.
- Toulemon, L., Pailhé, A., & Rossier, C. (2008). France: High and stable fertility. *Demographic Research*, 19, 503-556.
- Tsuya, N. O. (2017). “Low fertility in Japan—no end in sight”. East- West Center, Asia Pacific Issues Series reports, No.131
- Vignoli D., Bazzani G., Guetto R., Minello A., & Pirani E. (2020). Uncertainty and Narratives of the Future: A Theoretical Framework for Contemporary Fertility. En: Schoen R. (ed) *Analyzing Contemporary Fertility*. Cham: Springer, pp. 25-47
- Whittington, L. A. (1992). Taxes and the family: the impact of the tax exemption for dependents on marital fertility. *Demography*, 29(2), 215-226.
- Wilkins, E. (2019). “Low fertility: a review of the determinants”. UNFPA, Technical Division Working Paper Series No. 2
- Zhang, J., Quan, J., & Van Meerbergen, P. (1994). The effect of tax-transfer policies on fertility in Canada, 1921-88. *Journal of Human Resources*, 29, 181-201.